



Expediente: 3248/2025.

Procedimiento: selecciones de personal y provisiones de puesto.

Asunto: convocatoria para la cobertura de personal laboral fijo de una plaza y lista de reserva de auxiliar administrativo informática , por concurso oposición sujetas al proceso extraordinario de estabilización.

ANUNCIO

Por medio del presente se hace público el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de este Corporación número 4313/2025, de fecha 3 de diciembre de 2025, del siguiente tenor literal:

“PRIMERO.- Visto que el 19 de marzo de 2025 se publicó el anuncio de la convocatoria y las bases íntegras en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 34, bases específicas que regirán la convocatoria de los procesos derivado de la oferta de empleo extraordinaria de estabilización de empleo temporal y convocar dichos procesos, mediante el sistema de concurso oposición, y por turno libre, aprobado por Decreto de Alcaldía núm. 884/2025, de fecha 13 de marzo.

SEGUNDO.- Visto que el 31 de marzo de 2025 se publicó el anuncio del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado número 77.

TERCERO.- El plazo de presentación de solicitudes previsto por las bases era de veinte días hábiles, entre el 1 y el 30 de abril de 2025, ambos inclusive. No obstante, por Decreto de la Alcaldía número 1315/2025, de 29 de abril, se ampliaron todos los plazos administrativos cuyo vencimiento se produzca los días 29 y 30 de abril hasta el 2 de mayo de 2025 a las 23:59 horas, debido a la situación de caída del suministro eléctrico que derivó en una caída del sistema de telecomunicaciones.

CUARTO.- En el plazo de presentación de solicitudes, treinta y tres personas solicitaron participar en este procedimiento. El 29 de mayo de 2025, el técnico de administración general de Recursos Humanos emite informe jurídico proponiendo resolver ampliando el plazo máximo para aprobar las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en los procesos selectivos por diez días hábiles. El 2 de junio de 2025 se dicta el Decreto de Alcaldía núm. 1846/2025, en el sentido propuesto y se publica en el tablón de anuncios en la página web municipal el anuncio de dicha resolución.

QUINTO.- Concluido el plazo de presentación de solicitudes y revisadas las mismas, se emite la resolución de alcaldía 2257/2025, de 3 de julio, de aspirantes admitidos y excluidos provisionales al proceso selectivo, publicando anuncio de la misma el 4 de julio de 2025, con requerimiento a los aspirantes excluidos (y a los omitidos en ambas relaciones, en su caso) de la subsanación de las causas de exclusión y la presentación de las alegaciones que a su derecho convinieran, en los términos de la base quinta de las que rigen el presente procedimiento, en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio.

SIXTO.- Visto que por Resolución de Alcaldía 4021/2025, de 21 de noviembre, se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para la cobertura por personal laboral fijo de una plaza de auxiliar administrativo/a de informática, grupo C, subgrupo C2, por concurso-oposición, sujeta al proceso extraordinario de estabilización.

SÉPTIMO.- Resultando que en la relación de aspirantes excluidos de dicho Decreto, está incluido Don Erik Pérez Morales, con n.º de identificación ***9640** por aportar fotocopia de la titulación solo a una cara.

OCTAVO.- Resultando que por registro de entrada n.º 2025-E-RE-7095, de fecha 5 de



julio, fuera del plazo de subsanación pero antes de la emisión de la resolución de aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de este proceso selectivo, don Erik Pérez Morales presenta fotocopia del título por ambas caras, subsanando así su exclusión de la lista definitiva.

I.- De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: «Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos».

Los errores susceptibles de corrección mediante resolución administrativa deben ser materiales, de hecho o aritméticos, caracterizados por ser ostensibles, manifiesto, indiscutibles y evidentes por sí mismos, y por poder apreciarse simplemente con los datos del expediente, sin que sea necesario interpretar las normas jurídicas aplicables ni realizar valoraciones o juicios legales. Están excluidas, pro tanto, las cuestiones que supongan error de Derecho o requieran modificar la esencia o el sentido del acto.

La rectificación puede efectuarse en cualquier momento, bien de oficio o a instancia de parte, siempre que no impliquen la anulación o sustitución plena del acto (salvo en ámbitos específicamente previstos). El órgano competente es, por regla general, el mismo que dictó el acto o resolución objeto de la corrección. El procedimiento suele ser muy ágil y puede implicar la suspensión de la ejecución del acto mientras se resuelve el error, sin necesidad de garantías, y con plazos específicos para su resolución en sede tributaria o de Seguridad Social.

La corrección debe respetar la supervivencia y validez sustantiva del acto administrativo, y no puede incluir declaraciones jurídicas, valoraciones o revisiones de la voluntad administrativa. Únicamente es posible subsanar defectos puramente accidentales, como nombres, fechas, operaciones numéricas, o errores de transcripción. No está permitido modificar declaraciones de derechos, fundamentos jurídicos, ni contenido esencial de sentencias o actos administrativos por esta vía.

Para discernir si nos encontramos ante un error, deberemos acudir a la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo que a este respecto se ha manifestado en los siguientes términos:

«El error de hecho, tal como se ha venido configurando por la doctrina, es aquel que después de corregido no cambia el contenido del acto administrativo en que se produce, de manera que éste subsiste con iguales efectos y alcance una vez subsanado el error, y así se refleja en la doctrina jurisprudencial y del Consejo de Estado (**Sentencias de 8 abril 1965, 18 abril 1975, 8 y 19 abril 1967, 29 noviembre 1983, 25 febrero 1987 y 29 marzo 1989, y, Dictámenes de 23 enero 1953 y 18 diciembre 1958**), al sentar de que hay que negar la existencia de error de hecho, material o aritmético, siempre que su apreciación implique un juicio valorativo, exija una operación de calificación jurídica o cuando la rectificación operante represente realmente una alteración fundamental del sentido del acto», negándose la libertad de rectificación incluso en caso de duda o cuando la comprobación del error exija acudir a datos sin constancia expedienta». (**Sentencia Tribunal Supremo de 6 de octubre 1994**). ... Tiene declarado asimismo este Tribunal que los errores de hecho o aritméticos se caracterizan por versar sobre un hecho, cosa o suceso, esto es, acerca de una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, estando, por tanto, excluido de su ámbito todo aquello que se refiera a cuestiones de derecho, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración legal de las pruebas, interpretación de disposiciones legales y calificaciones jurídicas que puedan establecerse (**Sentencias, entre otras, de 25 enero y 2 julio 1984**). Por último, también es doctrina jurisprudencial la que indica que los actos que la Administración puede rectificar con base en



el expresado artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo son aquellos que después de corregidos no cambian el contenido del acto administrativo en que se produce, de manera que éste subsiste con iguales efectos y alcance una vez subsanado el error (**Sentencias, entre otras, de 30 mayo 1985, y 29 marzo y 20 diciembre 1989**). (**Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1995**). Como dijo certeramente nuestro Tribunal Supremo en **Sentencia de 8 julio 1982**, «el ejercicio de la potestad rectificatoria no entraña una revocación del acto administrativo en sentido jurídico», añadiendo que «sin que pueda la Administración subespecie de potestad rectificadora encubrir una auténtica potestad revocatoria, por lo que hay que advertir la necesidad de diferencias entre el error de derecho y el mero error de hecho o material, negando la existencia de éste siempre que su apreciación implique un juicio valorativo». En efecto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala ... tiene establecido que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por sí sólo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose «prima facie» por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurren, en esencia, las siguientes circunstancias:

- 1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de documentos.
- 2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte.
- 3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
- 4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos.
- 5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica).
- 6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo (es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión, porque ello entrañaría un «fraus legis» constitutivo de desviación de poder).
- 7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo (**Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1995**).»

Confrontada la anterior jurisprudencia con las circunstancias expuestas, ha de determinarse que nos encontramos ante un auténtico error de hecho.

Desde este punto de vista, resulta aplicable en esto supuestos el artículo 109.2 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo tanto, procede reconocer formalmente el error de omisión de esta solicitud cometido mediante la correspondiente resolución.

II.- Considerando que corresponde a la Alcaldía la emisión de la correspondiente Resolución en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.



Vista la Propuesta de resolución PR/2025/4313 de 2 de diciembre de 2025.

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Proceder a la corrección de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para la cobertura por personal laboral fijo de una plaza de auxiliar administrativo/a de informática, grupo C, subgrupo C2, por concurso-oposición, sujeta al proceso extraordinario de estabilización, que se recogen como anexo, en los siguientes términos:

Donde dice:

ANEXO

Relación de aspirantes admitidos.

APELLIDOS, NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Ceres, Gianfranco	***3870**
Chueca Rodríguez, Nauzet	***0351**
Coello Hernández, Antonio José	***0457**
Correa Hernández, Haduen	***4584**
Évora Álvarez, Raúl	***9561**
García Santos, Adán	***2631**
Gil Linares, Begoña Leticia	***6302**
Gómez Castro, Eduardo Raúl	***6884**
González García, Francisco	***0420**
González González, Francisco Samuel	***2592**
González González, José Eliezer	***7597**
González Ramos, Nazaret del Carmen	***9292**
Gutiérrez Rojas, José Patricio	***4742**
López González, María del Carmen	***4734**
Lourido Fernández, Brais	***4795**
Luis Díaz, Airam	***4081**
Martín González, Alexander Jesús	***4626**
Martínez Felipe, Nestor Jesús	***5579**
Méndez Ceballos, Jan	***0387**
Pérez Cabrera, Andrea	***9909**
Pérez Cejas, David	***8870**
Pérez González, Gabriel	***4010**
Pérez Placeres, Mahy Faya	***5045**
Plasencia Casañas, Ner Sebastián	***3984**
Rodríguez Morales, Romén	***5118**
Rubio-Manzanares Cano, Alejandra	***2916**
San Luis Mosegue, Ernesto	***5154**
Solís Hernández, Oswaldo Enrique	***3377**

Relación de aspirantes excluidos

Apellidos y nombre	N.º de identificación	Causa de exclusión
Alfonso Expósito, Alexandre	***1224**	1,3,6
Artigas Estrán, María Belén	***5289**	4





De León Martín, Jonatan	***1255**	1
Jiménez González, Emanuel	***5217**	4
Pérez Morales, Erik	***9640**	5

Leyenda de causas de exclusión:

1. No aporta documento nacional de identidad.
2. Documento nacional de identidad no vigente en el plazo de presentación de solicitudes.
3. No se aporta la titulación.
4. Titulación que no se corresponde con el requisito.
5. Se aporta fotocopia de la titulación solo a una cara.
6. No se abonan las tasas/derechos de examen.

Debe decir:

ANEXO

Relación de aspirantes admitidos.

APELLIDOS, NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Ceres, Gianfranco	***3870**
Chueca Rodríguez, Nauzet	***0351**
Coello Hernández, Antonio José	***0457**
Correa Hernández, Haduen	***4584**
Évora Álvarez, Raúl	***9561**
García Santos, Adán	***2631**
Gil Linares, Begoña Leticia	***6302**
Gómez Castro, Eduardo Raúl	***6884**
González García, Francisco	***0420**
González González, Francisco Samuel	***2592**
González González, José Eliezer	***7597**
González Ramos, Nazaret del Carmen	***9292**
Gutiérrez Rojas, José Patricio	***4742**
López González, María del Carmen	***4734**
Lourido Fernández, Brais	***4795**
Luis Díaz, Airam	***4081**
Martín González, Alexander Jesús	***4626**
Martínez Felipe, Nestor Jesús	***5579**
Méndez Ceballos, Jan	***0387**
Pérez Cabrera, Andrea	***9909**
Pérez Cejas, David	***8870**
Pérez González, Gabriel	***4010**
Pérez Morales, Erik	***9640**
Pérez Placeres, Mahy Faya	***5045**





Plasencia Casañas, Ner Sebastián	***3984**
Rodríguez Morales, Romén	***5118**
Rubio-Manzanares Cano, Alejandra	***2916**
San Luis Mosegue, Ernesto	***5154**
Solís Hernández, Oswaldo Enrique	***3377**

Relación de aspirantes excluidos

Apellidos y nombre	N.º de identificación	Causa de exclusión
Alfonso Expósito, Alexandre	***1224**	1,3,6
Artigas Estrán, María Belén	***5289**	4
De León Martín, Jonatan	***1255**	1
Jiménez González, Emanuel	***5217**	4

Leyenda de causas de exclusión:

1. No aporta documento nacional de identidad.
2. Documento nacional de identidad no vigente en el plazo de presentación de solicitudes.
3. No se aporta la titulación.
4. Titulación que no se corresponde con el requisito.
5. Se aporta fotocopia de la titulación solo a una cara.
6. No se abonan las tasas/derechos de examen.

SEGUNDO.- *Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá formalizar demanda, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Social de SC de Tenerife o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a la que acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la interposición o resolución del recurso administrativo, según proceda, uniéndolo copia de todo ello para la entidad demandada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social."*

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá formalizar demanda, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Social de SC de Tenerife o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a la que acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la interposición o resolución del recurso administrativo, según proceda, uniéndolo copia de todo ello para la entidad demandada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

En Guía de Isora a,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



